



Registro 2012/016402 Nif G-70321807



DIGITAL SIGNATURE CERTIFICATE

DELGADO
GONZALEZ MIGUEL
ANGEL - 32413124Y

Firmado digitalmente por DELGADO GONZALEZ MIGUEL
ANGEL - 32413124Y
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=32413124Y, sn=DELGADO GONZALEZ,
givenName=MIGUEL ANGEL, cn=DELGADO GONZALEZ
MIGUEL ANGEL - 32413124Y
Fecha: 2019.12.24 10:13:26 +01'00'

Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia

Inscrita en el Registro de la Xunta de Galicia **R.L. 2012/016402 Nif G-70321807 Impreso D.L: C 47-2015**

Se acumulan dos solicitudes en aras a la brevedad:

A la Comisión de Transparencia de Galicia.

Con copia para Registro Defensor do Pobo.

A la Defensora do Pobo y con copia a su condición de Presidenta de la Comisión de Transparencia de Galicia reclamacions@comisiondatransparencia.gal

Asunto: Comunicación incumplimiento Resolución RSCTG 142/2019 de fecha 2 de 12 de 2019 (Google) y solicitud de apertura expediente Defensor do Pobo.

Miguel Ángel Delgado González, con D.N.I 32.413.124-y Teléfono 981 926397, 630389871 Domicilio a efectos de notificaciones en, C/ Juan Castro Mosquera, 28 2º Dcha. 15.005 A Coruña, y como Presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, Nº de Registro 2012/016402, Nif : G-70321807, como mejor proceda DICEN:

Como ya bien conocen POR EL EXPEDIENTE DE REFERENCIA que damos por reproducido en aras a la brevedad comunicamos la que la Secretaría de Medios incumple la resolución, y transcurrido el plazo de 15 días solicitamos la ejecución de la resolución y apertura de los correspondientes expedientes ante la Valedora do Pobo y la Comisión de Transparencia de Galicia.

Al mismo tiempo solicitamos se valore por esas instituciones a la luz de las reiteradas desobediencias o incumplimientos en los variados expedientes ante estos organismos al que nos dirigimos sobre la misma responsable Sra María del Mar Sánchez Sierra el remitir a la Fiscalía de Santiago en base a los siguientes fundamentos jurídicos toda la información;

Mar Sánchez Sierra es la mayor infractora de las leyes de transparencia de España con indicios de desobediencia a las instituciones públicas

La asesora del PPdeG acumula la tasa mas alta de España en el incumplimiento de resoluciones de Transparencia de la función pública, sin que su más que acreditado encubridor Sr Feijóo (su padrino en todos los cargos públicos y actividades que desempeña en la Xunta y entes adscritos) la cese de forma fulminante. Mar Sánchez mantiene la "Desobediencia y su deber de colaborar con las instituciones públicas, el Valedor do Pobo y la Comisión de Transparencia de Galicia, se cree impune que puede infringir las leyes, quien le diga o informe algo le responde con una querrela criminal por calumnias en los juzgados de Santiago a sabiendas de que se la van admitir los magistrados de ese distrito judicial.

La Fiscalía debería estudiar imputarla por un posible delito de desobediencia a las instituciones públicas de Galicia, acumula un porcentaje demasiado elevado de resoluciones incumplidas y de ardices administrativos para evadirse de sus responsabilidades, junto a la condena por la Junta Electoral de actividades prohibidas por la Ley o la Sentencia Firme que condena su departamento por vulnerar la Constitución y la Libertad de Prensa.

La Comisión de Transparencia debería ser la primera en remitir cuenta a la Fiscalía de que en todos los entes y departamentos que gestiona Mar Sánchez Sierra no actuó de forma correcta sobre la Ley de Transparencia sobre la que acumula más de 20 expedientes por conculcar la Ley llegando a desobedecer las resoluciones de la Comisión, no han contestado a sus peticiones reiteradas de información por lo que puede haber incurrido en un delito de desobediencia castigado en el Código Penal.

En su informe correspondiente a 2018 presentado ayer ante los medios, el Consello de contas determina que es necesario y urgente activar protocolos contra la corrupción institucional en la Xunta de Galicia y la implantación de un código ético " como ya hay pocos ", mostrando así que tiene conocimientos de que hay exceso de corrupción bajo el Gobierno de Feijóo "PPdeG" sin especificar a sus autores, dejando la sospecha sobre la totalidad de los funcionarios bajo la administración gallega, que a nuestro juicio debería presentar la dimisión el conselleiro maior del Consello de Contas, José Antonio Redondo, sobre lo que curiosamente sobre los entes y Mar Sánchez Sierra pasa de largo sin nombrar los temas que viene publicando Xornal Galicia sobre el dispendio de fondos públicos y fondos europeos, mostrando así que el no ver, ayuda a no tener que hacer informes ni informar como es el caso de la destrucción del sistema sanitario de Galicia y la disolución paulatina del Sergas...

Es importante señalar que en el Código Penal (CP) se contemplan varios comportamientos en los que adquiere relevancia la desatención de una orden emitida por quien ostenta una posición de autoridad sobre el destinatario de la misma, sin importar si de ello se sigue algún resultado concreto que no debía producirse o que se tuviera el deber de evitar. En efecto, no se trata de delitos de resultado sino de mera actividad (o de mera inactividad, tal como ha sido expresado en varias oportunidades por los tribunales españoles; entre otras: STS 263/2001 de 24 febrero).

Ofrecemos lo que gestiona y como lo hace Mar Sánchez Sierra que entendemos con sobrados indicios en documentos públicos bajo aproximación al delito de desobediencia previsto en el art. 410.1 CP, es decir: al que se comete contra la Administración pública, comúnmente denominado como desobediencia funcional; delito especial propio, que solamente pueden cometer quienes revisten la condición de autoridad o funcionario público. Por ello, no nos detendremos, en esta oportunidad, en los supuestos de desobediencia punible que pueden cometer los particulares, recogidos en el art. 348.4.c) CP (desobediencia a órdenes de la Administración en materia de seguridad de explosivos), o en el art. 502.1 CP (que es uno de los "Delitos contra las instituciones del Estado" y que prevé penas para quien no comparezca ante una Comisión de Investigación o para quienes obstaculicen la investigación del Defensor de Pueblo, Comisión de Transparencia, Tribunal de Cuentas u órganos equivalentes de la Xunta de Galicia.

Pues bien, con el art. 410.1 CP se sanciona, con penas de multa e inhabilitación especial:... a las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales.

Según jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo (STS 285/2007), el delito de desobediencia requiere la concurrencia de los siguientes elementos:

a) la existencia de un mandato expreso, concreto y terminante de hacer o no hacer una específica conducta, emanado de la autoridad o sus agentes y que debe hallarse dentro de sus legales competencias;

No es necesaria, en cambio, la reiteración de la orden; circunstancia que, de darse, puede ser tomada en cuenta en la valoración de la conducta contumaz.

b) que la orden, revestida de todas las formalidades legales, haya sido claramente notificada al obligado a cumplirla, de manera que éste haya podido tomar pleno conocimiento de su contenido.

La tesis de que sin notificación y sin requerimiento personal este delito no llega a cometerse ha sido matizada por el Tribunal Supremo, que ha sostenido que, si bien ello es exigible cuando el delito de desobediencia se imputa a un particular (cfr. arts. 556 , 348.4.c , 616 quáter CP), no lo es, en cambio, en aquellas otras ocasiones en las que el mandato está incluido en una resolución judicial o en una decisión u orden de la autoridad superior y que se dirige a una autoridad o funcionario público (cfr. art. 410.1 CP). En tales casos, bastaría con que el funcionario o la autoridad a la que se dirige el mandato tenga conocimiento de su existencia y, sobre todo, del deber de acatamiento que le incumbe (STS 177/2017, de 22 de marzo).

c) Debe haber una resistencia del requerido a cumplimentar aquello que se le ordena, lo que equivale a la concurrencia del dolo de desobedecer, que implica que frente al mandato se alce el obligado a acatarlo y cumplirlo en una oposición tenaz, contumaz y rebelde.

La negativa franca, clara, patente, indudable, indisimulada, evidente o inequívoca, puede deducirse, tanto de comportamientos activos como omisivos, expresos o tácitos» (STS 263/2001, de 24 de febrero, STS 54/2008, de 8 de abril, entre otras), también existe tal negativa abierta cuando se adopte una reiterada y evidente pasividad a lo largo del tiempo sin dar cumplimiento al mandato, es decir, cuando sin oponerse o negarse expresamente el mismo tampoco se realice la actividad mínima necesaria para llevarlo a cabo (SSTS 485/2002, de 14 de junio, 1203/1997, de 11 de octubre, entre otras).

d) La orden, por otra parte, debe ser jurídica y materialmente susceptible de ser cumplida.

El art. 410.2 CP se establece que no incurrirán en responsabilidad criminal las autoridades o funcionarios por no dar cumplimiento a un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de Ley o de cualquier otra disposición general.

Según una interpretación que logró consolidarse jurisprudencialmente (SAP Vizcaya (Secc. 1ª), 8/2005, de 22 de febrero), tanto si se considera que este precepto contiene una causa específica de justificación, como si se entiende que contempla una causa de exclusión de la tipicidad penal, lo que resultaría en cualquier caso innegable es que nunca se puede hacer valer o plantear frente a resoluciones judiciales firmes, puesto que, se sostiene: «carecería de sentido, en otro caso, que el artículo 118 de la Constitución Española estableciese la obligación de cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales; o que el artículo 17.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial proyectase sobre las Administraciones Públicas, las Autoridades y funcionarios, las Corporaciones y todas las entidades públicas y privadas, y los particulares, la obligación de respetar y, en su caso, cumplir las sentencias y las demás resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las Leyes; o que el artículo 117.3, también de la Constitución Española, atribuyese en exclusiva la potestad jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, en todo tipo de procesos, a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, conforme a las reglas de competencia y procedimiento establecidas por las mismas. Siendo evidente, por lo demás, la flagrante violación que en otro caso se produciría de valores y principios constitucionales, así como de derechos fundamentales (igualdad y justicia -artículo 1.1 CE-, legalidad y seguridad jurídica -artículo 9.3 CE-, y tutela judicial efectiva -artículo 24 CE-, respectivamente) que, siendo la máxima expresión de un Estado Constitucional de Derecho, deben ser respetados por todos.

Y cuando decimos todos también nos referimos a María del Mar Sánchez Sierra.

En su consecuencia y trascurrido el plazo conforme a derecho sin haber cumplido la resolución, se comunica a los efectos oportunos, con el ruego de información a esta parte de lo que en derecho corresponda

Esta es nuestra opinión que gustosos sometemos a cualquier otra mejor fundada, en A Coruña, a fecha del registro del certificado digital,



Presidente Pladesemapesga:

10 jul. 2014 - Con la colaboración de la empresa "eGarante", se ha integrado una herramienta técnica que permite acreditar la existencia de un contenido

Acerca de: PLADESEMAPESGA - Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, es una asociación no lucrativa, Nif: G-70321807 - Registro 2012/016402 con más de 52.800 socios y formada por personas físicas, empresarios, políticos, profesionales y autónomos, marineros, mariscadores/as, ecologistas, asociaciones, expertos en todos los sectores del Mar y la Pesca, que comparten el interés y la inquietud por el entorno del Sector Marítimo Pesquero de Galicia. Cuya presencia en Internet queda reflejada en: www.pladesemapesga.com y info@pladesemapesga.com.

Miembro del Grupo de Interés del Mercado Nacional de los Mercados y la Competencia

<https://rgi.cnmc.es/gruposdeinteres/pladesemapesga-plataforma-en-defensa-del-sector-maritimo-pesquero-de-galicia>

La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia esta adherida a la Plataforma X la Honestidad

<http://plataformaxlahonestidad.es/adhesiones/pladesemapesga>

AyTP. Equipo Multidisciplinar e Acción y Transparencia Pública de PLADESEMAPESGA

<http://plataformaxlahonestidad.es/adhesiones/aytp>



Pladesemapesga consta en el Registro de Transparencia de la Unión EUROPEA con el

Número Registro: 539622127908-83

europa.eu

<http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/search.do?locale=es&reset=>

REXISTRO XERAL DO VALEDOR DO POBO

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Data: 28/11/2019 8:23:59

SAIDA**12837/19**

D. Miguel A Delgado González,
Plataforma en Defensa del Sector
Marítimo Pesquero de Galicia
(PLADESEMAPESGA)
C/Juan castro Mosquera 28, 2º Dcha
15.505 A Coruña

Reclamante: D. Miguel Ángel Delgado González
Expediente. Nº **RSCTG 142/2019**

Correo electrónico: director@xornalgaliciasur.com

ASUNTO: Resolución da Comisión da Transparencia de Galicia na reclamación presentada ao amparo do artigo 28 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

Vista a reclamación presentada por D. Miguel Ángel Delgado González en representación da Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (PLADESEMAPESGA), e considerando os antecedentes e fundamentos xurídicos que se especifican a continuación, a Comisión da Transparencia na sesión celebrada o día 26 de novembro de 2019, adopta a seguinte resolución:

ANTECEDENTES

Primeiro. D. Miguel Ángel Delgado González en representación da Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (PLADESEMAPESGA), presentou, mediante escrito que tivo entrada no rexistro do Valedor do Pobo o 9 de outubro de 2019, unha reclamación contra a Resolución do 3 de outubro de 2019, da Secretaría Xeral de Medios da Presidencia da Xunta de Galicia, pola que se lle concede o acceso á información pública relativa a información e documentación pública relacionada coa entidade GOOGLE Europa, España ou de calquera outro tipo internacional, GOOGLE Adwords ou AdSense. Solicitou así mesmo, información sobre calquera tipo de relación da Xunta de Galicia, responsabilidade da Secretaría Xeral de Medios con Twitter, Instagram, Facebook

O interesado considera que se vulnerou o disposto na Lei do procedemento administrativo común das Administracións Públicas e na Lei de Transparencia ao non proporcionarlle a información solicitada

O escrito viña acompañado de copia da resolución da Secretaría Xeral de Medios da Xunta de Galicia do 9 de outubro de 2019 que se impugna, e copia de diversos artigos de prensa e correo electrónico.

Segundo. Con data 23 de outubro de 2019 déuselle traslado da documentación achegada polo reclamante á Secretaría Xeral de Medios da Presidencia da Xunta de Galicia, para que, en cumprimento da normativa de transparencia, achegase informe e copia completa e ordenada do expediente.

A recepción da solicitude pola administración foi o 29 de outubro de 2019.

Terceiro. Con data 12 de novembro de 2019 a Secretaría Xeral de Medios da Presidencia da Xunta de Galicia contesta a petición remitindo o informe e o expediente instruído.

No informe faise constar que, dado que a información que se solicita puidera entrar dentro do ámbito das funcións asignadas á Subdirección Xeral de Xestión e Coordinación de Medios, de acordo co Decreto de estrutura orgánica dos órganos superiores e de dirección dependentes de Presidencia, solicitouse información a dito órgano. A dita Subdirección informa que non constan nesa Subdirección Xeral, datos relativos a relacións con GOOGLE Europa, España ou de calquera outro tipo internacional, GOOGLE Adwords ou Adsense no período comprendido entre 01/01/2018 e 30/09/2019, polo que a Secretaría Xeral de Medios resolve conceder o acceso á información solicitada, consistindo esta en informar que non constan datos relativos ás entidades sobre as que se solicita información.

FUNDAMENTOS XURÍDICOS

Primeiro. Competencia e normativa

O artigo 24 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, de carácter básico na súa práctica totalidade, establece que contra toda resolución expresa ou presunta en materia de acceso á información, poderá interpoñerse unha reclamación ante o *Oficina de Transparencia e Bo Goberno*, con carácter potestativo e previa a súa impugnación en vía contencioso-administrativa. Esa mesma lei, na súa disposición adicional cuarta, establece que a resolución da reclamación prevista no artigo 24 corresponderá, nos supostos de resolucións ditadas polas Administracións das Comunidades autónomas e o seu sector público, e polas Entidades Locais comprendidas no seu ámbito territorial, ao órgano independente que determinen as Comunidades Autónomas.

O artigo 28 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, establece que contra toda resolución expresa ou presunta en materia de acceso á información pública, poderá interpoñerse unha reclamación ante o Valedor do Pobo, correspondendo á Comisión da Transparencia, de acordo co disposto no artigo 33, a resolución das devanditas reclamacións.

Segundo. Procedemento aplicable

O artigo 28.3 da citada Lei 1/2016 establece que o procedemento de reclamación axustarase ao previsto nos parágrafos 2, 3, e 4 do artigo 24 da Lei 19/2013, que establece que as

reclamacións contra resolucións en materia de acceso á información, que ten carácter potestativo e previo á impugnación en vía contencioso-administrativa, axustarán a súa tramitación ao disposto na lexislación de procedemento administrativo común en materia de recursos.

Terceiro. Dereito de acceso á información pública

A Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, recoñece no seu art. 24 o dereito de todas as persoas a acceder á información pública, entendida esta como os contidos ou documentos, calquera que sexa o seu formato ou soporte, que consten en poder dalgún dos suxeitos incluídos no ámbito de aplicación desta lei e que fosen elaborados ou adquiridos en exercicio das súas funcións, do mesmo xeito que a definición contida no artigo 13 da Lei estatal 19/2013 que ten carácter básico.

O concepto de información pública e o dereito de acceso á mesma configúranse de forma ampla tanto na normativa autonómica como na estatal. Os titulares do dereito son todas as persoas, sen que o solicitante estea obrigado a motivar a súa solicitude de acceso á información (art. 26.4 Lei 1/2016, do 18 de xaneiro).

O obxecto da Lei 19/2013, é ampliar e reforzar a transparencia da actividade pública e regular e garantir o dereito de acceso a información relativa a aquela actividade (art. 1). No seu preámbulo sinala que a transparencia, o acceso á información pública e as normas de bo goberno deben ser os eixos fundamentais de toda acción política e só cando a acción dos responsables públicos sométese a escrutinio, cando os cidadáns poden coñecer como se toman as decisións que lles afectan, como se manexan os fondos públicos ou baixo que criterios actúan as nosas institucións pódese falar do inicio dun proceso no que os poder públicos comezan a responder a unha sociedade que é crítica, esixente e que demanda participación dos poder públicos.

Pola súa banda, a Lei galega 1/2016, sinala na súa Exposición de Motivos que a crecente esixencia cidadá de control público da actuación das administracións aconsella a aprobación dunha norma que supera os anteriores estándares e que se concreta nun texto legal que establece esixencias engadidas de transparencia e acceso á información pública.

Cuarto. Prazo para a interposición do recurso

O artigo 28.3 da Lei 1/2016, establece que o procedemento das reclamacións fronte ás resolucións en materia de acceso á información pública axustarase ao previsto no artigo 24 da Lei 19/2013.

O artigo 24 da Lei 19/2013 establece que fronte a toda resolución expresa ou presunta en materia de acceso a información poderá interpoñerse unha reclamación con carácter potestativo e previo á súa impugnación na vía contencioso-administrativa.

Esta reclamación interpoñeráse no prazo dun mes para contar desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou desde o día seguinte a aquel no que se produzan os efectos do silencio administrativo.

Dado que segundo consta no expediente remitido, ao interesado notificóuselle a resolución con data do 3 de outubro de 2019 e a reclamación tivo entrada no Rexistro do Valedor do Pobo con data do 9 de outubro de 2019, debe admitirse a reclamación por estar presentada en prazo.

Quinto.- Análise do expediente

O acceso á información pública está configurado na Lei como un dereito de amplo ámbito obxectivo e subxectivo e, especialmente, o concepto de información pública e, por tanto, o posible obxecto dunha solicitude de información que a Lei consagra é todo contido ou documento que obre en poder dun organismo suxeito á norma que fose obtido ou elaborado no exercicio das súas funcións. Este feito, entender que pode ser obxecto dunha solicitude de información calquera información que posúa o organismo ou entidade ao que se dirixa a mesma, así como que non sexa necesario motivar a solicitude, polo que non está vinculada á titularidade dun interese por parte do solicitante, o que fai difícil cando non imposible, subtraer do marco da normativa de transparencia unha solicitude de información que cumpra as condicións indicadas na mesma.

No presente caso, o interesado reclama contra unha resolución pola que se lle concede o acceso á información pública referida a documentación pública, relacións, colaboracións, campañas de publicidade mediante ou calquera outra, coa entidade Google Europa, España ou de calquera tipo internacional, Google Adwords o Adsense e as realizadas a través de intermediarios de comunicación. A entidade alega que na súa solicitude se fai expresa referencia á información sobre calquera tipo de relación da Xunta de Galicia, responsabilidade da Secretaría Xeral de Medios con Twitter, Instagram, Facebook, e na resolución impugnada se omite toda referencia a esa información. Por outra banda, e aínda que a entidade reclamante non o alega, o certo é que a resolución basease nun informe emitido pola Subdirección Xeral de Réxime Xurídico da Secretaría Xeral de Medios, que se refire unicamente á inexistencia de datos relacionados con esas entidades nun período concreto, comprendido entre o 1/1/2018 e 30/9/2019, sen facer referencia algunha a relacións que con esas entidades que puideran existir en datas anteriores.

A entidade reclamante na súa solicitude, non acota o período temporal do que require os datos, polo que debe concluírse que a Secretaría Xeral de Medios non proporcionou correctamente a información. De acordo co anterior, procede a estimación parcial da reclamación presentada, debendo a Secretaría Xeral de Medios proporcionar ao interesado, de existir, información referente ás relacións da Xunta de Galicia con GOOGLE Europa, España ou de calquera outro tipo internacional, GOOGLE Adwords ou Adsense con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2018, e ás relacións, da Xunta de Galicia, de existir, con Twitter, Instagram e Facebook

En base aos feitos e fundamentos de dereito anteriormente expresados, a Comisión da Transparencia,

ACORDA

Primeiro: Estimar parcialmente a reclamación presentada por D. Miguel A Delgado González, en representación da Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (PLADESEMAPESGA) con data 9 de outubro de 2019, contra a Resolución do 3 de outubro de 2019, da Secretaría Xeral de Medios da Presidencia da Xunta de Galicia, pola que se lle concede o acceso á información pública relativa a información e documentación pública relacionada coa entidade GOOGLE Europa, España ou de calquera outro tipo internacional, GOOGLE Adwords ou Adsense.

Segundo: Instar a Secretaría Xeral de Medios, a que, no prazo máximo de 15 días hábiles, responda á petición de información solicitada de acordo co disposto no fundamento xurídico quinto desta resolución, respectando os límites dos artigos 14 e 15 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, e o artigo 22 da mesma lei, no que fai á formalización do acceso.

Terceiro: Instar a Secretaría Xeral de Medios, a que, no prazo máximo de 15 días hábiles, remita a esta Comisión da Transparencia copia do envío e da información solicitada ao reclamante.

Contra esta resolución que pon fin á vía administrativa unicamente cabe, en caso de desconformidade, interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte á notificación desta resolución, ante a Sala do contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co previsto no artigo 10.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 27 de novembro de 2019

76706870F MARIA
DOLORES FERNANDEZ
(R: S6500009C)

Firmado digitalmente por
76706870F MARIA DOLORES
FERNANDEZ (R: S6500009C)
Fecha: 2019.11.27 11:29:13
+01'00'

María Dolores Fernández Galiño
Presidenta da Comisión da Transparencia.

RECIBO DE PRESENTACIÓN NO REXISTRO ELECTRÓNICO DA XUNTA DE GALICIA

A solicitude, escrito ou comunicación para Presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que non contén cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado. presentada por MIGUEL ANGEL DELGADO GONZALEZ con NIF 32413124Y tivo entrada no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia cos seguintes datos:

NÚMERO DE ENTRADA	DATA E HORA DA PRESENTACIÓN	DESTINO
2019/2550886	24-12-2019 10:39	SECRETARÍA XERAL DA PRESIDENCIA

A seguinte táboa recolle un resumo electrónico da solicitude, escrito ou comunicación presentada e, se fose o caso, un índice e un resumo electrónico da documentación que se declara achegar:

Documento achegado	Nome do arquivo	Resumo electrónico do arquivo (Algoritmo SHA-256)
Solicitude	Solicitude-PR004A-20191224.pdf	F068650BE408C91B75E69C3B2FEB87085D268F31DD3F2E47780C6416F6DB54AE

Outros documentos acreditativos ou relativos a i n c u m p l i m i e n t o - BD148154194FC171F53F1E4934581E87338A232485957
situacións secretariademediosRSCTG_142-2019- 7FB1760CCDDA7156369
google.pdf

